

SEPTIEMBRE 1973

REVISTA MENSUAL

MONTHLY REVIEW

UNA PUBLICACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE

AÑO I

Chile:

6

3 AÑOS DE LA UNIDAD POPULAR

A. Zimbalist - B. Stallings

REVOLUCION y SEXO

B. Ollman

América Latina: venas abiertas

E. Galeano

Destacamos de Nuestro Próximo Número:

ISRAEL: SUBIMPERIALISMO?

Por: LAWRENCE LOCKWOOD

"El creciente poder económico, político y militar de naciones tales como las de Brasil y Suráfrica se ha convertido en tópico vital de discusión por parte de la izquierda. Mientras que las masas, en los países "subimperialistas", permanecen cruelmente explotadas por el capital local y extranjero, las clases gobernantes experimentan una nueva prosperidad, derivada de la explotación interna y del avance en el comercio exterior. Las burguesías "subimperialistas" también se han dedicado a intervenir política y militarmente fuera de sus fronteras, como quedó demostrado por la función de Brasil en el golpe de 1971 en Bolivia, y por las maniobras de Irán, tendientes a establecer una "esfera de influencia" en el Golfo Pérsico.

A primera vista, Israel parece tener poco en común con Brasil, Irán o Suráfrica, en donde la población es más numerosa y los recursos naturales son mucho más ricos. Sin embargo la idea "subimperialista" ha existido dentro del movimiento sionista desde el comienzo (Theodore Herzl, en 1890, habló del estado judío en Palestina como de una potencial "fortificación de Europa en contra del Asia"), y hay evidencia suficiente para demostrar que dicha idea se ha venido realizando en la práctica, en forma creciente, durante los últimos años. En lo que sigue, quisiera llamar la atención sobre parte de esta evidencia, especialmente en lo referente a la creciente función de Israel como productor y exportador de armas".

Lector...

Si usted está de acuerdo con que estas Selecciones en Castellano de Monthly Review, satisfacen una real necesidad, comprenderá que es de suma importancia lograr el máximo posible de nuevos lectores. Es por ello que para continuar con éxito nuestra tarea, nos resulta imprescindible contar con su efectivo apoyo y cooperación.

Dirijase a:

Suscripciones:

MONTHLY REVIEW
Apartado Nal. 8004
Bogotá, Colombia

Anual \$ 150 (US\$ 10)
Semestral \$ 80 (US\$ 5)

E. Retina

Ejemplar \$ 15.00

CHILE: 3 AÑOS DE LA UNIDAD POPULAR, por A. Zimbalist y B. Stallings	1
REVOLUCION SOCIAL Y REVOLUCION SEXUAL, por B. Ollman	24
LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA, por E. Galeano	40

MR Monthly Review es una publicación mensual editada en Colombia para la América Latina. Los artículos han sido seleccionados de M.R. (edición en inglés) dirigida por Paul M. Sweezy y Harry Magdoff.

DIRECTOR: Rafael A. Corredor

CORRESPONDENCIA A: Monthly Review

Apartado Nal. 8004

Bogotá, Colombia

LICENCIA DE CIRCULACION: Resolución N° 0065, febrero 1, 1973, Min-Gobierno, Colombia.

NOTAS DE LOS EDITORES

Con la presente edición, Monthly Review en castellano cumple seis meses de aparición en Colombia para la América Latina. Recordamos a nuestros suscriptores semestrales la necesidad de renovar las suscripciones lo antes posible. También queremos solicitar se nos informe con suficiente anticipación sobre los cambios efectuados en las direcciones a fin de evitar pérdidas en el correo y demoras innecesarias en la distribución de la revista.

Continuamente recibimos la sugerencia de publicar artículos sobre la realidad colombiana. En este sentido, y desde un comienzo, hemos solicitado la colaboración a nuestros intelectuales, pero lamentablemente, hasta la presente, no nos ha llegado ningún material sobre Colombia. Insistimos de nuevo en la necesidad de atender a este llamado y nos permitimos sugerir el envío de artículos, comentarios bibliográficos, réplicas, etc., con los cuales podamos iniciar una sección en la revista con participación colombiana.

Con el fin de contribuir al cubrimiento de los costos de producción, Monthly Review anuncia que sus páginas están disponibles para la promoción de libros, anuncios comerciales de librerías, infor-

(pasa a la contraportada interior)

CHILE: 3 AÑOS DE LA UNIDAD POPULAR

Por: Andy Zimbalist y Bárbara Stallings.

El siguiente artículo fue terminado el 3 de septiembre, día en que A. Zimbalist salió de Santiago después de permanecer un año en Chile. Pocos días después, el 11 de septiembre, un golpe militar derrocó al gobierno de la Unidad Popular. Publicamos este artículo con el fin de clarificar la situación que prevaleció en vísperas del golpe, dentro de la perspectiva ofrecida por los tres años de gobierno de la U.P. Un análisis del golpe mismo y de las lecciones que de él puedan ser extraídas, deberá esperar hasta tanto no se disponga de una mayor información.

—Los Editores.

I

El programa electoral de la UP reflejó el mínimo común denominador de una coalición de partidos socialistas y social demócratas. Los principales miembros de la coalición, el Partido Socialista y el Partido Comunista, tienen una historia de participación en el estado burgués. Desde comienzos del siglo, la izquierda tradicional chilena concentró gran parte de su energía en las candidaturas al congreso y en los intentos de reformar el estado capitalista dependiente. No es sorprendente, por consiguiente, el que la base del programa de la UP haya sido, en esencia, anti-imperialista y anti-monopolista más que socialista.

Con la victoria de Allende, en septiembre de 1970, la izquierda tradicional obtuvo, por primera vez, el control sobre la rama ejecutiva del gobierno. Sin contar con el control sobre las ramas legislativa y judicial, la UP se propuso abrir la singular "Vía Chilena al Socialismo". Sin embargo, la UP no

desarrolló una estrategia para la toma absoluta del poder estatal*. La contradicción inherente a la construcción del socialismo sin contar con el poder estatal no fue considerada seriamente por Allende y otros voceros de la UP. Las masas fueron convencidas de que se harían cambios estructurales graduales, con los cuales se favorecería su posición económica y social, hasta lograr el socialismo. El gobierno no preparó a las masas para que éstas aceptaran los sacrificios en la etapa de "transición al socialismo", ni para que despojaran a la burguesía del poder estatal.

Así como la UP falló en la definición de una estrategia coherente para destruir el estado burgués, también falló en el desarrollo de una política consistente con respecto a la mayor parte de su programa básico. El ingreso sería redistribuido y la inflación detenida, pero se falló en definir un sistema racional de precios que permitiera solidificar estas conquistas. La UP prometió llevar a cabo, en forma acelerada, la reforma agraria (de Frei), pero nunca definió claramente la forma de organización económica y social que tomaría la tierra expropiada. Grandes sectores de la industria estratégica, monopolística y de dominación extranjera serían nacionalizados, pero la UP no sentó claros lineamientos para la administración y planificación de estos sectores. Se quiso neutralizar y persuadir a las capas medias (pequeña burguesía, pequeños agricultores y profesionales) ampliando los créditos y las garantías sobre la propiedad, pero la UP no acordó una política de control sobre el sistema de distribución, con el cual los sectores medios están íntimamente relacionados. En síntesis, la heterogeneidad y la experiencia histórica de los partidos de la UP redujeron el programa a una serie vaga de propuestas para un cambio estructural radical. La clase trabajadora quedó sin una dirección revolucionaria coordinada.

Esto no significa que la UP careció de una clara orientación popular. Con los profundos cambios estructurales, las masas alcanzaron más altos niveles de movilización, lo cual

Andy Zimbalist enseña economía en Harvard University y es miembro de la Union For Radical Political Economics. Bárbara Stallings estudia ciencia política en Stanford University.

fue aprobado por todos los sectores de la coalición, pero el PC y los miembros más conservadores del PS querían estar seguros de que cualquier movilización se hiciera bajo control directo del gobierno. Por otra parte, los líderes locales de los grupos más radicales dentro del PS, junto con el MAPU, el MIR, la IC y el PCR**, estimularon en las masas el desarrollo de sus propios órganos de control popular y la exigencia al gobierno para avanzar más rápidamente. El hecho de que este liderazgo no estuviera centralizado, dejó a la clase trabajadora sin una estrategia coherente para la conquista del poder estatal.

Durante los dos primeros años de la UP, estas contradicciones no fueron claras para la gran mayoría de la clase trabajadora. El programa de Allende verdaderamente estaba avanzando. En 2 años, la UP expropió casi el doble de la tierra que el gobierno de Frei expropiara en 6 años; más de 150 empresas fueron nacionalizadas (incluyendo el inmenso sector minero); se logró el control de más del 90% de las instituciones crediticias; se aumentó la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional, de un 55% pasó a más de un 66%; se generaron crecimientos en el producto total de 8.5%, en el primer año, y de 5% en el segundo; se redujo la tasa de desempleo (de 8.3%, en diciembre de 1970, pasó a 3.0% en diciembre de 1972). Estos fueron tal vez los más importantes logros, claramente favorables para la clase trabajadora. La "Vía Chilena al Socialismo", libre de sacrificios y libre del poder estatal, parecía estar funcionando.

* Por toma absoluta del poder estatal entendemos la destrucción del estado burgués y su reemplazo por un aparato estatal proletario. El completo control sobre el estado burgués puede facilitar, bajo ciertas condiciones, la creación de un estado proletario, pero el estado burgués debe ser destruido definitivamente para poder establecer un estado de los trabajadores.

** El MAPU (Movimiento de Acción Popular Unida) y la IC (Izquierda Cristiana) son grupos disidentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC). El PCR (Partido Comunista Revolucionario) se desprendió del PC, y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) se formó de los más radicales sectores de todos los partidos de izquierda. El PCR y el MIR no son miembros de la coalición de la Unidad Popular.

A fines del segundo año, sin embargo, muchos de los factores económicos positivos heredados por Allende estaban agotados: las reservas en divisas, que eran de US\$ 333 millones en diciembre de 1970, pasaron a ser negativas en diciembre de 1972. Estados Unidos, con su "bloqueo invisible", suspendió los créditos (que eran del orden de los US\$ 220 millones por año durante el gobierno de Frei), privando a Chile de la "moneda dura" necesaria para la compra de materias primas y repuestos que hicieran funcionar la dependiente economía chilena*; la capacidad ociosa en la industria, que fuera de un 25% cuando Allende asumió el poder, dejó de ser tomada en cuenta; y así sucesivamente. Lo que es más importante, la burguesía — antes desorientada y dividida, división reflejada en sus dos más sobresalientes partidos, el PDC y el más reaccionario Partido Nacional (PN) — había logrado reagruparse. Este reagrupamiento permitió a la burguesía coordinar la defensa del estado capitalista. Mientras que la burguesía se había limitado a una auto-defensa, principalmente por los medios legales (judiciales y parlamentarios), para diciembre de 1972 esta defensa también llegó a ser extralegal. Antes de esta fecha, la burguesía se ocupó de actos terroristas y de sabotajes en un nivel local, pero ahora esta acción entró a formar parte de un plan central dirigido para derrocar a

* Para una excelente discusión del "bloqueo invisible", véase la NACLA Newsletter de enero de 1973. Para evitar malos entendidos, debemos hacer claridad en cuanto a que si bien Allende heredó ciertas condiciones económicas explotables por la UP, no heredó una economía próspera. Por el contrario, el producto per cápita venía creciendo en sólo un 1% anual desde la Primera Guerra Mundial; la producción agrícola per cápita había disminuído desde 1930; y en noviembre de 1970 Chile tenía una deuda externa de US\$ 4.000 millones, cerca de un 40% de la riqueza nacional. En la presente renegociación de esta deuda en París, Estados Unidos no acepta posponer parte alguna de los US\$ 400 millones que Chile debe pagar anualmente por concepto de intereses y amortización (casi el 40% de los ingresos en divisas), a menos que las compañías Kennecott y Anaconda sean compensadas. El Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo se niega a hacer préstamos a Chile, a menos que se siga, por parte de Chile, una política monetaria austera, se restrinja el consumo de la clase baja y se limite a un 20% los reajustes en los salarios reales.

Allende*. La derecha opera ahora una estrategia clara — volver a tomar el control total del estado burgués. Cualquier táctica es legítima si apoya dicha estrategia. La izquierda como un todo, sin embargo, no ha contrapuesto una estrategia en relación al poder, limitándose a responder a la derecha sobre bases puramente tácticas.

Cuando estamos siguiendo los eventos sobresalientes en el tercer año de Allende, la imagen de un gobierno débil, que responde a las presiones y que trata de conciliar a los tres grupos centrales (trabajadores, burguesía y ejército), es cada vez más clara. Por una parte, más y más trabajadores reconocen la necesidad de echar abajo la burguesía, para poder iniciar la construcción del socialismo, y de organizarse en órganos de poder paralelos al estado capitalista. Al mismo tiempo, el gobierno es cada vez más incapaz de controlar a la derecha y de sostener las instituciones básicas y la infraestructura de la economía.

II

En octubre de 1972, la derecha, siguiendo las líneas de la estrategia de la ITT (sabotaje-derrocamiento), intentó sacar ventaja del empeoramiento económico y jugar su triunfo final. Propietarios de camiones, comerciantes y profesionales se lanzaron a una huelga general, intentando paralizar la economía. Como se destaca en el plan de la ITT, con el caos económico y político se justificaría un golpe militar.

* La participación de la CIA en este plan es comprobable. Como de costumbre, es difícil precisar la función desempeñada, pero podemos proyectar al menos cuatro sólidos indicadores de la intervención por parte de la CIA. Primero, en una investigación hecha en 1968 por el alemán Julius Mader se descubrió una larga lista de agentes de la CIA. De esta lista, cinco personas eran funcionarios de la embajada americana en Chile cuando Allende asumió el poder, incluyendo a Emmanuel Boggs, jefe del Instituto Americano para el Desarrollo del Trabajo Libre en Chile. Segundo, se ha descubierto que la CIA financia la estación de televisión antigubernista y abiertamente subversiva de la Universidad Católica. Tercero, y tal vez lo más incriminatorio, fue el discurso televisado del senador liberal del PDC, Renán Fuentealba, el 22 de agosto. Fuentealba dijo creer que la campaña insurreccional de la derecha estaba financiada y dirigida por agencias extranjeras. Cuarto, durante las huelgas patronales de octubre de 1972 y agosto de 1973, el precio del dólar en el mercado negro descendió, con lo cual se indicaba el considerable flujo de dólares en el mercado para financiar estas campañas.

Con el fin de profundizar la parálisis económica, numerosos capitalistas cerraron sus empresas. La clase trabajadora, sin embargo, no permitió parar la economía; más de un 98% de los obreros permaneció en el trabajo. En donde los capitalistas intentaron el paro, los trabajadores se apoderaron de las plantas. Muchos trabajadores duplicaron sus tareas, se movilizaron junto a estudiantes, amas de casa y burócratas oficiales para trabajar horas extras en las fábricas y distribuir materias primas y alimentos, utilizando para ello los carros privados, camiones y trenes disponibles.

El gobierno, en lugar de iniciar una acción firme y positiva de liderazgo en el avance revolucionario, permitió ser ubicado en una posición de reacción frente a la ofensiva de la clase obrera. Se legitimó la toma de más de 50 fábricas por medio de los decretos de intervención y requisición*. La misma ley hubiera permitido al gobierno la toma de las firmas de camioneros y distribuidores (el gobierno controla sólo un 30 por ciento de la distribución de alimentos) y el racionamiento a través de la intervención de los supermercados y otras empresas detallistas. Sin embargo, tales medidas no fueron tomadas durante la huelga patronal de 27 días.

Aunque la acción revolucionaria de los trabajadores no fuera organizada por el gobierno, tampoco fue espontánea. Cuadros locales del PS, el MAPU, el MIR, la IC y el PCR fueron responsables de la agitación y dirección de los trabajadores durante octubre. Se organizaron los *cordones industriales* para prevenir el sabotaje y solidarizarse con los trabajadores que estaban tomando fábricas**. La idea

* Estos decretos son prerrogativas del ejecutivo, establecidas en los años 30, y permiten al gobierno administrar aquellas fábricas que interfieran el normal funcionamiento de la economía. La mayoría de firmas sometidas al control del gobierno por la UP fue tomada a través de dichos decretos.

** El primer cordón fue organizado en junio de 1972. En ese entonces, el más grande cordón industrial de Santiago, el de Cerrillos, se originó para apoyar la intervención a Perlak, una firma procesadora de alimentos. La firma, no siendo considerada un monopolio estratégico por parte del gobierno, no iba a ser intervenida. Pero la presión organizada de los trabajadores de Cerrillos obligó al gobierno a intervenir. Esta, sin embargo, fue la única acción importante del cordón antes de octubre.

de los *cordones* condujo a la creación de órganos paralelos de poder (*comandos comunales*), los cuales unían a trabajadores, amas de casa, estudiantes, soldados y desempleados. Los *comandos* deberían encargarse de la producción, distribución y defensa en sus comunidades. El PC, el PR (Partido Radical) y sectores del PS no apoyaron este esfuerzo en un comienzo. Finalmente el gobierno reconoció la necesidad de los *comandos*, pero insistió en tenerlos bajo su control, privándolos de un poder autónomo. Carentes de metas concretas y de una dirección centralizada, la mayoría de *comandos* dejó de existir cuando terminó la huelga patronal.

Sin el apoyo de los trabajadores, la huelga empezó a decaer y finalizó el 2 de noviembre con el ingreso de tres militares al gabinete de Allende. La UP procedió a estabilizar un inherentemente inestable estado de cosas. Algunas 15 empresas fueron devueltas a sus propietarios; se dio garantías de no expropiación a las compañías camioneras, a las firmas distribuidoras y a los minoristas; y se restauró lo que puede ser llamado un más razonable nivel de caos.

Aunque los *comandos* ya habían sido socavados, las masas habían alcanzado un nuevo nivel de comprensión y organización. Resistieron la devolución de las fábricas, exigieron la expropiación de nuevas plantas y agencias distribuidoras y un mayor poder para las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP)*.

La derecha continuó su ofensiva. La huelga de camioneros en octubre coincidió con la época de plantación. Los fertilizantes y semillas nunca llegaron a las granjas y escasearon en todo el país. Este factor y las condiciones desfavorables del clima anticiparon una limitación de la cosecha. Pero la derecha hizo que las masas se sintieran más hambrientas

* Las JAP surgieron en julio de 1971 como resultado de un acuerdo entre el entonces ministro de economía, Pedro Vuskovic, y las amas de casa de Santiago. Las Juntas tenían como misión asistir el proceso de distribución, asegurando que los comerciantes locales respetaran los precios oficiales y no desviaran los artículos hacia el mercado negro. Los poderes efectivos de las JAP, sin embargo, nunca fueron claramente definidos.

de lo que fueran aún antes de Allende*. Fortaleció su control sobre la distribución de alimentos, ofreciendo a los campesinos precios más altos de los pagados por el gobierno (el gobierno había establecido controles oficiales de precios con el fin de garantizar el poder de compra de la clase trabajadora). Los productos así comprados por la derecha, nunca llegaron al mercado: fueron acaparados en bodegas y sótanos privados. Casi todos los días, la agencia gubernamental de control de precios, DIRINCO, descubría enormes cantidades de aceite, detergentes, azúcar, carne, dentífricos, cigarrillos y otros artículos de consumo básico.

Además, la burguesía se aprovechó en forma total de su control (65%) sobre los medios de difusión. La escasez de un producto se difundía, todo el mundo se apresuraba a comprar lo máximo posible y la escasez sería así asegurada. Estas medidas de la burguesía, junto con los problemas productivos en gran parte causados por el bloqueo de E.U., causaron las famosas colas en los supermercados, panaderías, cigarrerías, etc. Esto fue parte de la estrategia derechista, tendiente a oponer al gobierno trabajadores y sectores medios.

Aunque las anteriores tácticas han tenido algún éxito con respecto a los grupos medios, quienes ven amenazados sus patrones de consumo suntuario, la clase trabajadora se ha movilizado más hacia la izquierda, exigiendo al gobierno mayor firmeza frente a la oposición**. Desafortunadamente, el go-

* Debe anotarse que, por lo menos al principio, esto no fue logrado. La producción nacional de alimentos creció en un 5% durante los dos primeros años. El gobierno complementó esta oferta de alimentos con grandes importaciones. Como resultado, el consumo per cápita de alimentos se incrementó en un 20% durante los dos primeros años de gobierno de la UP. Este promedio implica un incremento aún más grande en el consumo de las clases populares.

** Se nota esta tendencia no sólo por las acciones concretas de los trabajadores (formación de cordones, toma de fábricas, buses, autopistas, etc.), sino también en las elecciones sindicales locales, las que muestran un movimiento del PDC hacia los partidos de la UP, y del PC hacia el PS y el MIR. Recientemente, el PC falló en su intento de arrebatarse el control del PS sobre los cordones. El movimiento del PDC hacia la UP se refleja también en las elecciones de marzo de 1973, en las cuales la UP obtuvo el 44% de la votación, en comparación con el 36.3% que eligió a Allende en septiembre de 1970. Esto hizo de Allende el primer presidente chileno, desde la Segunda Guerra Mundial, que aumenta su apoyo electoral después de dos años y medio de gobierno.

bierno ha sido incapaz para tomar ventaja de este apoyo de masas y ofrecer un liderazgo revolucionario unificado. Cuando más, el gobierno sigue cautelosamente a las masas, mientras que las divisiones en el seno de la UP han resultado en vacilantes y contradictorias políticas.

En respuesta al sabotaje derechista en la distribución, el entonces ministro de economía, Fernando Flores, propuso un amplio racionamiento en enero de 1973. El sistema incluiría 27 productos básicos de consumo. Pero la UP empezó a retroceder y rechazó las intenciones de racionamiento. La derecha había puesto a trabajar su aparato propagandístico, sosteniendo que Allende era otro Stalin y que el racionamiento significaba el fin de la libertad del mercado y que por tanto era antidemocrático. En lugar de explicar que el mercado es de por sí antidemocrático, es decir, que refleja un sistema de producción y distribución en el cual los ricos tienen más votos que los pobres, Allende temerosamente retiró el plan de racionamiento. Pero los trabajadores apoyaban el plan de Flores y se tomaron una de las agencias gubernamentales de distribución, exigiendo el racionamiento. Puesto el gobierno en una posición de reprimir las masas o acceder a sus demandas, resolvió crear la Secretaría de Distribución Nacional y cooperar en la instalación de un modificado sistema de racionamiento. Hasta hoy, este sistema ha tenido un éxito relativo. Se estima que un 25% a un 30% de la población recibe raciones de 5 a 15 artículos.

Otro interesante ejemplo de la presión ejercida por las masas ocurrió en enero, cuando el entonces ministro de finanzas, Orlando Millas (del PC), propuso la devolución de algunas fábricas ya intervenidas. Los cordones industriales tenían una meta concreta —la defensa de las conquistas de los trabajadores. Los obreros se movilaron, se tomaron las avenidas y llevaron a cabo una manifestación en frente del palacio presidencial, exigiendo la suspensión del plan Millas. Pero el gobierno no suspendió el plan inmediatamente. Dos factores incidieron aquí. Primero, la presencia militar en el gabinete forzó al gobierno a tratar de estabilizar la situación por medio de una acción "políticamente neutral". Los militares estaban en el gabinete para prevenir la guerra civil y no pa-

ra crear el socialismo. Segundo, como ya se explicó, la ideología y la estrategia predominantes de la UP eran las de consolidar los avances anti-imperialistas y anti-monopolistas logrados y, por consiguiente, racionalizar la situación económica existente. Haciendo esto, se esperaba incrementar los beneficios para la clase trabajadora. El PC sostenía que el estado ya tenía suficientes problemas con el manejo de los monopolios nacionalizados y que se debía perfeccionar la administración de estas empresas, antes que preocuparse por las pequeñas y medianas fábricas*. Sin embargo, los problemas en las fábricas estatales tenían poco que ver con la administración económica *per se*; más bien, estos eran una función del poder económico existente de la burguesía, de la economía nacional como un todo, de la falta de coordinación en la burocracia estatal y del propio estilo de trabajo del PC (de arriba hacia abajo) en las fábricas bajo su control. Además, en aquellas fábricas en donde el PDC tenía una representación considerable (entre el 20% y el 40%: en ningún caso la oposición alcanzó una mayoría), los administradores, supervisores y capataces demócratas cristianos habían desmejorado en el trabajo, impedían el cambio social y la participación, o directamente sabotaban la producción. Estos problemas se hubieran atenuado tan sólo si se hubiera dado más confianza a las masas y se hubiera atacado más agresivamente a la burguesía.

También es importante destacar que la política del PC, en este sentido, tenía el claro efecto de desmovilizar a los trabajadores. A través del proyecto Millas, los obreros fueron avisados de que el gobierno decidiría qué fábricas serían nacionalizadas. En esta forma, los obreros que buscaban orga-

* Es importante anotar que el proyecto Millas fue elaborado por el PC, Allende y los ministros militares. Cuando el proyecto fue anunciado, los otros miembros de la UP reclamaron no haber sido informados al respecto. Así, la ausencia de centralismo democrático, lo cual es evidente por la falta de canales de contacto con las masas (por ejemplo, la no representación obrera en los organismos sectoriales y nacionales de planeación), se junta a la ausencia de contacto y unidad entre los comités centrales de los partidos de la UP. Es crucial aclarar, sin embargo, que la planeación económica, prácticamente es inexistente y no existirá mientras la burguesía sea la fuerza legislativa, judicial y económica dominante en el país.

nizarse por su cuenta para la toma de varias fábricas ya no tienen razón para ello. Debería indicarse, por lo demás, que de las 300 fábricas del área económica social controladas por el estado, las de mayor producción y éxito en la participación eran precisamente aquellas cuya socialización se debió a la movilización obrera*.

Una falla primordial de la política del PC y la UP ha sido el predicar la creación del socialismo sin sacrificio. En su intento de ganar apoyo electoral, dicha política se ha basado en la redistribución del ingreso. Esta postura, por ejemplo, se encuentra detrás de la decisión del PC en el sentido de racionalizar el sector estatal, a expensas de la movilización de las masas y de la reducción del control burgués sobre las fuerzas productivas. Pero aún más importante, esta postura economicista ha dejado a las masas sin una preparación para el presente período de aprieto económico.

El problema tiene dos aspectos. Primero, históricamente los sindicatos han defendido intereses económicos y rara vez, o nunca, se han ocupado de asuntos relacionados con el control. Aunque, con notables excepciones, los sindicatos no han sido típicamente tomados por la administración en Chile, sí han operado paternalmente en la mayoría de los casos. Más importante aún, las firmas chilenas tradicionalmente han tenido por lo menos dos sindicatos, uno para obreros y otro para empleados. Esto ha fortalecido su carácter económico, desviándolos de un programa de lucha de clases y de control. Segundo, la mayoría de los sindicatos, fundamentalmente los controlados por el PC, se ha opuesto a la creación de organizaciones obreras paralelas que pudieran desafiar su poder. El PC ha insistido enfáticamente en la necesidad de dar más poder a los sindicatos con el fin de resolver este conflicto de intereses, mientras que otros partidos de la UP abogan por la

* A. Zimbalist, ha estado trabajando con la Central Unica de Trabajadores (CUT) y acaba de completar un estudio de 40 fábricas del Area Social. Esta Area comprende aquellas firmas que en forma temporal o permanente pasaron a ser administradas por el estado. Es en estas firmas en donde el gobierno ha iniciado el programa de participación obrera. El Area Social cuenta, en estos momentos, con aproximadamente un 35% de la producción industrial.

disminución del control sindical y por la creación de nuevos órganos no paternalistas y unitarios de clase.

Además, existe una clara tendencia en aquellas fábricas cuyos administradores pertenecen al PC (los administradores son elegidos por el gobierno de acuerdo con un sistema de cuotas por partido) a ser más rígidas y menos desarrolladas en cuanto a participación obrera. Existe la participación formal en aproximadamente 170 de las 320 firmas estatales, y no más que en 35 empresas se puede hablar de una genuina conciencia decisoria y participación obrera.

La experiencia con la participación obrera a nivel empresarial en ninguna forma ha sido un fracaso. La producción en el sector estatal aumentó en más de un 20% en 1971 y 1972. Enormes mejoras sociales han sido logradas en las fábricas: creación de cafeterías y cooperativas, centros médicos, grupos culturales y de teatro, bibliotecas, facilidades para el deporte, mayor seguridad industrial; innovaciones en la producción; impresionantes aumentos en los salarios reales, así como igualación en las escalas salariales; eliminación de capataces, etc. Tal vez más importante es que los trabajadores tienen un nuevo sentido de la libertad, dignidad y orgullo, después de haber sido despreciados, espiados y divididos por tantos años. La superación y los cambios en la mentalidad obrera no pueden negarse y deberían ser vistos como consecuencia natural de las expropiaciones a la burguesía. Pero un sonriente y complacido trabajador que puede comer más y que es menos reprimido, no es lo mismo que un trabajador que se compromete y empieza a tomar el control sobre aquellas instituciones y condiciones que forman su vida. La falla relativa de la UP en desarrollar más ampliamente la última variedad de conciencia obrera, tendrá severas implicaciones en el período de dificultades económicas que se avecina y ante la eventual necesidad de que la clase obrera asuma el control sobre el aparato estatal.

El problema de organización y conciencia en el campo, en donde la UP desarrolla un acelerado programa de reforma agraria, es aún más serio. Con raras excepciones, los órganos regionales de poder campesino no han funcionado. La política de expropiaciones ha sido decidida predominantemente por la

burocracia oficial. La gran mayoría de funcionarios del CO-RA y del Ministerio de Agricultura está concentrada en Santiago, manteniendo muy poco contacto con los campesinos. Las expropiaciones son lentas y burocráticas, dando tiempo a los terratenientes para que desmantelen el equipo productivo de las granjas. El sistema tradicional de inquilinaje no facilita la transformación socialista del campo. Los campesinos del área reformada (cerca del 15% del total del campesinado) se están convirtiendo en clase privilegiada de kulaks, empleando a campesinos de fuera del área. Esta situación se complica por las confusas y a menudo contradictorias políticas de la UP en el campo.

III

Para las elecciones de marzo, la derecha predijo para la UP entre un 32% y un 37% de la votación. La UP esperaba obtener entre un 35% y un 40%. La UP obtuvo un 44 por ciento. La derecha esperaba poder controlar las dos terceras partes del Congreso, con el fin de obviar los vetos de Allende y revertir los triunfos de la UP. Los partidos de la UP, por otra parte, se sintieron sorprendidos a la vez que con júbilo por los resultados electorales. Consideraron que, dado el fuerte apoyo pese al empeoramiento económico, se justificaba la remoción de los tres militares del gabinete.

En esta forma, después de cuatro meses con ministros militares, se integró un gabinete completamente civil y pro-UP. Después de los rápidos cambios estructurales ocurridos en octubre, las masas se sintieron frustradas ante la ausencia de mayores avances entre noviembre y marzo. Sin la presencia de los militares y con la mayor presión de las masas, el gobierno, en forma cautelosa, avanzó de nuevo con los trabajadores. Retiró el plan Millas, prometió no devolver fábricas a la burguesía y presentó una lista de 45 empresas a nacionalizar en un futuro próximo. Al mismo tiempo, la CUT organizó debates en las fábricas sobre la participación y propuso una representación obrera del 50% en los órganos de planeación sectorial y nacional. A pesar de que la planeación sectorial es mínima y que la planeación nacional es casi ine-

xistente, la proposición de la CUT constituye un paso positivo, ya que crea una meta y un punto claro de lucha intrínsecamente relacionado con el asunto del poder estatal.

Los principales partidos de oposición, el PN y el PDC, los cuales se habían unificado para las elecciones de marzo, empezaron a seguir tácticas diferentes aunque no contradictorias. El PN y su sector más derechista, Patria y Libertad, abiertamente tildaron de ilegítimo al gobierno y convocaron a la resistencia civil. El PDC continuó bloqueando los programas del gobierno en el Congreso, mientras expandía su política de sabotaje. Los dos partidos de oposición instigaron la confrontación callejera, destruyendo parcialmente las sedes de la UP, sus estaciones de radio y televisión y las editoriales, así como causando varios muertos y heridos.

En el Congreso, el PN y el PDC se unieron para reducir drásticamente el presupuesto del gobierno, dejando sin financiamiento muchos programas sociales y del sector estatal de la economía. Ante esto, la UP recurrió a los medios legales disponibles (financiación deficitaria). Esto ha servido para agravar el proceso inflacionario, el cual fue de un 163% en 1972 y parece superar el 300% en el presente año. Cuando el gobierno propuso el financiamiento de un reajuste de salarios por medio de impuestos progresivos sobre el patrimonio y el ingreso, la derecha rechazó el proyecto. La oposición dejó sin financiamiento los reajustes, agregando más combustible a las presiones inflacionarias. Cuando la UP propuso considerar el mercado negro y el acaparamiento como crímenes civiles, los partidos de oposición maquinaron la derrota del proyecto.

Otra maniobra, potencialmente más seria, se refiere a dos enmiendas constitucionales presentadas por la oposición. Una hubiera desmantelado gran parte del Área Social y la otra hubiera hecho retroceder a la reforma agraria. Esto ha sido importante porque ha intensificado la lucha institucional entre el presidente y el Congreso. Debido a una ambigüedad en la Constitución, no está claro si los vetos presidenciales a las enmiendas constitucionales pueden ser superados por simple mayoría o si se necesitan las dos terceras partes. El Tribunal Constitucional se ha declarado incompetente y no exis-

te por tanto un árbitro. El Congreso, desde luego, apoya la tesis de la simple mayoría y por consiguiente califica de ilegal la negativa del presidente para promulgar las reformas. Un punto final es que, si la tesis de la simple mayoría prevalece, esto podría capacitar al Congreso para enjuiciar al presidente o para acortar su período, cambiando la Constitución.

La derecha, minando la economía y abiertamente organizando la desobediencia civil, intenta generar otra huelga general. Reconociendo que la huelga patronal de octubre fracasó debido a la ausencia de los trabajadores, la oposición empieza a sembrar la agitación entre los empleados, pretendiendo dividir la clase trabajadora. En este sentido, la huelga en la más grande mina de cobre es ilustrativa. En mayo de 1972, los mineros de El Teniente obtuvieron, en contrato separado, un reajuste salarial automático de acuerdo al costo de vida. Según este contrato, los mineros recibirían un reajuste de un 50% a fines de 1972. En octubre del mismo año, el Congreso aprobó un aumento general de salarios de un 100%, para contrarrestar los efectos inflacionarios ocurridos desde enero. Debido a un error técnico, no se especificó que a los ya protegidos contra la inflación, a través de contratos individuales, no se les permitiría un aumento de salarios superior a un 100%. Así fue como la derecha empezó a organizar a los trabajadores de El Teniente, diciéndoles que tenían derecho a un 150% de aumento salarial. En mayo de 1973, los trabajadores ya habían sido convencidos para ir a la huelga.

El gobierno explicó que su política era la de dar protección a los trabajadores contra la inflación en un 100% y que dar a los mineros de El Teniente un 150%, no sólo sería inflacionario sino que aumentaría las desigualdades entre la clase obrera (los trabajadores del cobre ya están recibiendo cerca de cuatro veces el salario industrial promedio). A pesar del bloqueo en las avenidas y la intimidación al personal, los obreros, primero, y luego los empleados partidarios de la UP, en un 70% fueron a trabajar. Los líderes demócrata-cristianos de El Teniente no encontraron solidaridad con la huelga por parte de los obreros de otras minas. Curiosamente, la huelga del 30% de los obreros finalizó después del fallido intento de golpe del 29 de junio. Los empleados demócrata-

cristianos aceptaron los mismos términos propuestos por el gobierno siete semanas antes.

Mientras que la derecha fracasó en su intento de dividir a la clase trabajadora, la huelga de El Teniente logró infligir mayores estragos a la economía chilena. El cobre provee el 80% de las entradas en divisas y la huelga detuvo las exportaciones. Se estima que Chile perdió en esta forma US\$ 50 millones.

El caso de El Teniente es sintomático de los problemas que tiene la UP. De una parte, revela el inadecuado contacto con las masas. La derecha nunca debería haber tenido la oportunidad de engañar a los obreros partidarios de la UP. Por otra parte, la predominante filosofía de la transición al socialismo en forma pacífica y sin sacrificios, dejó a gran parte de la clase obrera con una idea economicista de la lucha de clases.

IV

El 29 de junio, cuando los trabajadores se disponían ir a sus empleos en el centro de Santiago, encontraron seis tanques disparando sobre el palacio presidencial y el Ministerio de Defensa. Aunque se habían descubierto muchas conspiraciones militares desde noviembre de 1970, ésta fue la primera puesta en acción. Un sector del Segundo Regimiento, en trabajo estrecho con Patria y Libertad, el PN y posiblemente sectores del PDC, esperaba suscitar una serie de levantamientos en todo el país. La mayor conspiración, sin embargo, había sido denunciada por el ejército a comienzos de esa semana, así que los otros conspiradores suspendieron sus planes y sólo un pequeño grupo de un regimiento actuó. Antes del mediodía los rebeldes se rindieron ante el general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército —aunque no sin antes ultimar a 22 personas, la mayoría civiles.

La mayor importancia del intento de golpe fue su efecto sobre la clase obrera. Cuando Allende recibió las primeras noticias en su residencia, emitió un llamado a los trabajadores para que controlaran sus fábricas y estuvieran listos para ir a las calles a defender al gobierno. Como resultado, más de

350 fábricas y varios cientos de haciendas fueron tomadas por sus trabajadores. Aunque paralizados desde fines de la huelga patronal de noviembre, los cordones industriales pudieron revitalizarse casi inmediatamente, en respuesta a la nueva crisis. Organizaciones de defensa fueron formadas rápidamente y los buses y camiones cercanos a las fábricas fueron tomados. La importancia de las organizaciones obreras fue fortalecida puesto que, temprano en la mañana del 29 cuando las dimensiones del golpe no eran claras aún, los partidos de la UP decidieron distribuir armas a los trabajadores.

En los días siguientes, continuando los rumores de más conspiraciones militares en otras partes del país, nuevos cordones fueron formados y se intentó combinar fuerzas de estudiantes, campesinos y otros grupos para constituir nuevos comandos comunales. Se hicieron preparativos de más largo plazo, en caso de confrontación; se dictaron cursos de primeros auxilios y se coleccionó instrumental médico; se alistaron provisiones de alimentos no perecederos; se intensificó el entrenamiento en el uso de armas; y la organización en las fábricas fue robustecida.

A nivel superestructural, sin embargo, las cosas fueron diferentes. Tan pronto como la amenaza inmediata fue conjurada, el gobierno decidió tratar de estabilizar la situación. En esta forma, aunque los trabajadores (con el respaldo de los cordones) estaban preparados para asumir la administración de las fábricas por ellos tomadas, no pudieron obtener el apoyo de la CUT para que estas empresas fueran incorporadas al Área Social. La CUT, dividida entre el PC (que era partidario de la devolución de todas las fábricas a excepción de las más importantes) y el PS (que no quería devolver ninguna fábrica), no hizo más que prometer un estudio del asunto. La toma de decisiones se transfirió a una comisión constituida por la CUT y el gobierno, dejando así a los trabajadores y cordones fuera del proceso, con el resultado de que eventualmente todas las fábricas, a excepción de 15, fueron devueltas. Además, se decidió recoger las armas que habían sido distribuidas, puesto que los militares se vieron amenazados por este "ejército paralelo", formado por una clase obrera armada. Finalmente, Allende invitó a conversa-

ciones a la Democracia Cristiana, como "última ocasión para evitar la guerra civil". Mientras que el PC apoyó esta invitación, el PS anunció su desaprobación. El PDC atendió el llamado, pero estipuló condiciones que obviamente no podrían ser aceptadas, como la del control militar sobre el gobierno. Las conversaciones fueron suspendidas después de sólo dos sesiones, pero lograron confundir y desmoralizar a los trabajadores.

La derecha, mientras tanto, siguiendo la doble estrategia antes mencionada, procedió a organizar actividades terroristas y huelgas, al mismo tiempo que se comprometió públicamente a conversar con el gobierno. Los camioneros propietarios se declararon en huelga indefinida a partir de julio 26. Otros gremios se unieron a los camioneros (comerciantes, profesionales, incluyendo a médicos y dentistas, lo mismo que el sector de buses y taxis fueron a la huelga). Los propietarios de nuevo fallaron en su intento de cerrar las fábricas, aunque la escasez de materias primas causó una drástica reducción en la producción industrial. Alrededor de un 30% a un 40% de las fábricas se encontraba trabajando a un 25% o 30% de capacidad. La industria azucarera trabajaba a sólo un 2% de capacidad.

La derecha había empezado una serie de actividades terroristas. Así, a mediados de agosto, el saldo era de 20 personas asesinadas, 71 ataques a camiones que aún funcionaban, 16 asaltos a estaciones de servicio y 37 a las líneas ferroviarias. Además, 2 importantes oleoductos habían sido explotados. El ataque potencialmente más serio ocurrió el 13 de agosto cuando los terroristas derribaron varias torres de alto voltaje, causando apagones por varias horas en 8 provincias. (El gobierno estima que, de haber funcionado todo el plan terrorista, todo el país hubiera quedado sin electricidad al menos por un mes). La carencia por parte del gobierno de control sobre la situación, fue simbólicamente demostrada por el apagón ocurrido mientras Allende se dirigía por radio a la nación, anunciando los efectos destructivos de la huelga de camioneros. Allende no pudo terminar su discurso.

La no concesión de poder real a los trabajadores dejó al gobierno solamente con los militares para su defensa y para

el mantenimiento del orden y funcionamiento normal del país. Fue así como los militares ingresaron al gabinete en octubre y al aparato gubernamental de distribución mayorista en enero. Además, fueron declarados varios estados de emergencia, los que permitieron el control militar durante tales periodos. Ahora, con la nueva crisis suscitada por los camioneros, los tres comandantes de las fuerzas armadas junto con el de carabineros ingresaron al gabinete el 9 de agosto.

Los militares, sin embargo, no son un muy fuerte apoyo para un gobierno que trabaja por el socialismo. Las fuerzas armadas tradicionalmente han tenido el papel de defender a la burguesía y al estado capitalista y, en esta forma, son más fuertes sus lazos con la derecha que con la izquierda. A esto se agrega la extracción de clase media alta y clase alta de la mayoría de los oficiales. (Los soldados, marinos y aviadores, por otra parte, tienden a ser principalmente campesinos, con una menor proporción de origen de clase obrera urbana). Dada la ausencia de una base popular, la derecha se ha visto forzada a contar con los militares para defender sus intereses y trabaja de cerca con oficiales simpatizantes. De hecho, las dos tácticas corrientes de la derecha dependen altamente de los militares. La extrema derecha (Patria y Libertad y el PN) defiende abiertamente una dictadura militar. La mayoría del PDC favorece una voz militar fuerte en el gobierno, pero una que esencialmente se limitaría a prevenir cualquier nuevo avance de la UP y que actúe como vigilante hasta las elecciones de 1976*.

Con la dependencia militar de la izquierda y la derecha, los militares se han convertido en fuerza central para el fu-

* La diferencia entre las tácticas del PDC y el PN puede explicarse así: (1) el PN tiene más estrechos contactos con los militares y por consiguiente una mayor posibilidad de controlar la actividad militar después del golpe; (2) el PDC tiene una base electoral mayor que la del PN y piensa que un candidato suyo apoyado por el PN podría triunfar en 1976; (3) el PDC ha dado tanto énfasis a su tradición electoral, que difícilmente podría explicar a sus miembros el apoyo a un golpe; (4) el PDC quiere controlar al gobierno como un partido y así no desea dar mano libre a los militares. El PN está interesado primordialmente en mantener el control sobre los medios de producción y alcanzar esta meta significa el sacrificio de su papel como partido —por lo menos temporalmente.

turo de Chile. Es bien sabido que hay serias divisiones dentro de las fuerzas armadas, pero no es clara la exacta correlación de fuerzas. Lo que está claro es que estas divisiones, al igual que la preocupación por preservar las instituciones, han mantenido a las fuerzas militares, como un todo, fuera de una acción decisiva real en contra del gobierno, por lo menos hasta los primeros días de septiembre. Por otra parte, especialmente unidades de la marina y la aviación han actuado en contra de los trabajadores, buscando armas cada vez que un miembro del Congreso hace una denuncia. Más del 90% de estas requisas se ha realizado en fábricas controladas por la izquierda, en las sedes de los partidos y en las residencias. En muchos casos, se ha causado daño a la propiedad y un trabajador fue muerto. Además, los oficiales derechistas han tratado de purgar de sus filas a quienes sean partidarios del gobierno, quienes se opondrían a un golpe militar. Esta ha sido una tendencia especialmente fuerte en la armada, donde un grupo numeroso de marinos fue arrestado por supuesta participación en una conspiración izquierdista. Algunos marinos fueron torturados con el fin de obtener confesiones. Se piensa que el motivo actual para los arrestos es el no haber tomado parte en la requisas de armas o simplemente el ser simpatizante de la UP*.

Tanto la oposición como el gobierno están tratando de consolidar su fuerza en los militares, como puede ser visto en los retiros recientes. Primero, César Ruiz, conservador comandante de la fuerza aérea, renunció como ministro de Obras Públicas y luego se le pidió la renuncia como comandante. Ruiz estuvo de acuerdo, y el procedimiento burocrático terminó antes de que la derecha se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. La derecha trató de revertir el proceso pero ya era muy tarde. Por otra parte, la derecha atacó públicamente al comandante en jefe del ejército y ministro de la Defensa, Carlos Prats, tan frecuentemente que él finalmente renunció poco después de que lo hiciera Ruiz. La renuncia de

* De acuerdo con el abogado de los marinos presos, el mecanismo utilizado fue el de simular golpe de estado. Aquellos que rehusaron tomar parte fueron enjuiciados con cargos fraudulentos.

Prats fue seguida por las de otros dos generales de orientación izquierdista.

La no preocupación previa, en cuanto al asunto del poder estatal, puso a la UP en una posición vulnerable. La UP ha sido incapaz de romper la huelga de camioneros, pese al ingreso de los militares en el gabinete. (Fue esta misma medida la que terminó con la huelga de octubre). Aunque las demandas de los camioneros han sido atendidas, la huelga ha llegado a ser abiertamente política, el presidente del gremio diciendo que no regresarán al trabajo hasta tanto no caiga el gobierno. De igual modo, la ausencia de poder deja al gobierno totalmente abierto para los ataques terroristas de la extrema derecha. Aunque los militares aún no han actuado abiertamente en contra del gobierno, tampoco ayudan a eliminar la amenaza derechista. Además, la derecha controla la justicia, con lo cual los derechistas arrestados obtienen rápidamente su libertad. El control sobre la prensa también ayuda en esta clase de actividad. Por ejemplo, después de que un grupo de Patria y Libertad asesinara a un edecán militar de Allende, la derecha inmediatamente publicó una "confesión" de un empleado del gobierno. El hombre que confesó había sido arrestado por embriaguez y golpeado por un capitán de la policía para extraerle una falsa confesión. Varias semanas después el hombre fue puesto en libertad, por la corte militar encargada de la investigación, cuando los verdaderos autores del crimen ya habían tenido tiempo de abandonar el país. Una historia similar fue inventada en relación a un miembro del MIR, quien fuera acusado de volar un oleoducto. Este caso fue tan estruendosamente falso, que aún una corte dominada por la derecha tuvo que dejar en libertad al acusado.

En estos momentos (septiembre 3), la derecha continúa montando sus ataques. La actividad económica virtualmente está paralizada en 17 de las 25 provincias. Los doctores (en su mayoría) han dejado de trabajar en clínicas públicas y hospitales, mientras que continúan atendiendo a sus pacientes ricos en las clínicas privadas. Las JAP están siendo totalmente incendiadas, mientras que las fábricas continúan siendo invadidas por regimientos de la fuerza aérea. Los conductores de camiones y los pequeños propietarios que han tratado de

regresar al trabajo, han encontrado bombas en sus vehículos y en sus residencias. Similarmente, los tenderos que han abierto sus establecimientos han tenido que afrontar los ataques terroristas. Los militares rehúsan proteger a los conductores y tenderos. Por temor de ofender a los militares, el gobierno no ha llamado a los obreros para que ejecuten estas tareas. Por la misma razón, Allende no ha deseado denunciar las actividades subversivas de la armada y la fuerza aérea durante los dos últimos meses. El país experimenta una verdadera crisis institucional y no existe, en el presente, una fuerza que imponga el orden. Es obvio que la lucha de clases ha llegado al punto en que la solución del proceso (hacia la derecha, el centro o la izquierda) es inminente.

V

Las consecuencias de no haber desarrollado una estrategia coherente para la conquista del poder estatal, por parte de la UP, están siendo claras en 1973. Esta situación ha sido el resultado de: (1) la experiencia histórica de los principales partidos de la UP; (2) la heterogénea composición de la coalición de Unidad Popular; y (3) los conflictos entre las líneas de partido reformistas y las revolucionarias dentro de la UP, con la consecuente falta de clara dirección de clase obrera. Estos factores han hecho que la UP dependa de una ineficiente burocracia estatal y no haya buscado un mayor contacto con las masas. Los inadecuados canales democráticos entre los altos líderes de la UP y las masas, a su vez, han fortalecido las tendencias reformistas dentro de la coalición.

El gobierno ha estado crecientemente limitado por las presiones de las ramas legislativa y judicial, las fuerzas armadas y la clase trabajadora. Cuando se han presentado oportunidades para avanzar, el gobierno no las ha aprovechado: durante 1971, cuando la oposición se encontraba dividida, no se aceleró el ritmo de las expropiaciones; durante la huelga patronal de octubre de 1972, los camioneros no fueron embargados; durante el período siguiente al intento de golpe de junio 29, el gobierno se abstuvo de denunciar a los elementos

fascistas dentro de las fuerzas armadas, a la vez que éstos invadían fábricas y torturaban marinos simpatizantes del gobierno. El resultado es que el gobierno, ante cada nueva crisis, se encuentra con menos opciones disponibles y mayor dependencia de los militares.

En estos tres años, la clase trabajadora se ha organizado en mejor forma y es más fuerte. Sin embargo, la ausencia de liderazgo y las medidas conciliatorias tomadas por la UP han conducido a un retroceso en el tiempo presente. La crisis de liderazgo es más seria cuando el asunto de definición del poder estatal es más claro.

La potencial resistencia de los trabajadores, junto con la de la mayoría de carabineros e importantes sectores del ejército, ha sido factor importante para desanimar un golpe militar de la derecha*. Este factor, junto con las profundas divisiones en el seno del PDC y de las fuerzas armadas, y la actitud conciliatoria del gobierno, plantean la posibilidad de estabilización del proceso y de un desplazamiento hacia el centro. Con el interés de evitar una confrontación abierta, Allende parece aceptar el criterio de los militares para establecer un vago consenso con el PDC. Esto implicaría el fortalecimiento de los militares, el fin de las expropiaciones a la burguesía, alguna represión a la clase obrera y la definición de garantías y reglas del juego para el funcionamiento de un capitalismo de estado. La otra posibilidad es que la CIA tenga éxito en sus presiones y conduzca a los militares a ejecutar un golpe y a precipitar una sangrienta guerra civil. Aparte de la intervención de los Estados Unidos y posiblemente de Brasil y Bolivia, la inadecuada preparación militar de la izquierda dejaría a la intemperie las perspectivas de socialismo en Chile.

Septiembre 3, 1973.

* Los carabineros son la fuerza de policía militarizada. En círculos de izquierda generalmente se cree que la mayoría de carabineros apoya a la UP.